

San Miguel, diez de abril de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de su motivo vigesimonoveno que se suprime.

**Y teniendo en su lugar, y además presente:**

**Primero:** Que, el Fisco de Chile dedujo apelación en contra de la sentencia definitiva dictada el veintiséis de mayo último, sólo respecto los siguientes capítulos: a) el rechazo de la excepción de improcedencia de la demanda de daño por repercusión deducida por doña Ana María Campillai Rojas; b) los montos de indemnización, que considera excesivos; y c) la determinación de la época desde la cual se devengan los intereses; de modo que no se cuestiona la responsabilidad que se demanda al Fisco de Chile, por el actuar de sus agentes, a propósito del daño moral sufrido por los demás actores, ni los presupuestos de hecho en que ello se apoya, esto es, que el día 26 de noviembre de 2019, doña Fabiola Campillai Rojas fue herida por un funcionario de Carabineros en servicio, con una carabina lanza gases en su rostro, causándole dolosamente lesiones gravísimas, sin prestarle auxilio pese a los requerimientos de su hermana Ana María Campillai, resultando con lesiones gravísimas que le dejaron secuelas irreversibles como la pérdida de su visión, el olfato y el gusto; asimismo, tampoco se discute en el recurso, que el funcionario referido, infringió los protocolos y normativa vigente respecto del uso de carabinas lanza-gases y el control del orden público, como asimismo su deber de prestar auxilio a la víctima, hechos que permiten tener por establecida la responsabilidad del Estado por falta de servicio por los actos realizados por funcionarios de Carabineros en ejercicio de sus funciones.

Solicita, en concreto, se rechace la demanda civil deducida por doña Ana María Campillai Rojas o, en subsidio se rebaje el monto indemnizatorio establecido a su favor en la sentencia; y que se proceda a rebajar prudencialmente los montos a que fue condenado el demandado respecto los demás actores; y, que, en cuanto a los intereses, estos se concedan desde que la demandada se constituya en mora.

**Segundo:** Que en lo que dice relación con el primer extremo del recurso, la sentencia en alzada acogió la demanda deducida por doña Ana María Campillai, luego de tener por establecido que los hechos ilícitos que le generaron daño a su hermana doña Fabiola Andrea, le generó un daño psicológico causado por la delicada situación de salud en que quedó y su largo padecimiento, que se vio agravado por haber presenciado directamente la agresión de carabineros que se lo provocó, a lo que se añade la angustia e impotencia que padeció al ver a su



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXWFXMXXLXW

hermana ensangrentada en el suelo, sin recibir ayuda pese a sus ruegos, lo que la configura como víctima de daño por repercusión de aquel sufrido por su hermana, y víctima de daño directo de los hechos materia de autos, regulando el quantum de la indemnización que le corresponde como resarcimiento por el daño moral sufrido, en la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos), desestimando, a su respecto, la excepción de improcedencia de la demanda.

**Tercero:** Que, al respecto, el apelante insiste en dicha última defensa, indicando en su recurso, que las reparaciones satisfactivas en casos por el de la especie, no pueden extenderse a parentescos más allá que padres, hijos y cónyuges, conforme el derecho comparado lo sugiere, afirmando que la actora doña Ana María Campillai Rojas, carece de legitimidad (sic) activa para demandar, pues el impacto que tuvo en el entorno familiar los hechos que afectaron a la demandante señora Fabiola Campillai Rojas, no puede extenderse *ad infinitum*, debiendo limitarse la irradiación del daño por repercusión a los parientes de grado más próximo.

**Cuarto:** Que el concepto de legitimación activa, tal y como reconoce la doctrina, corresponde a una noción procesal vinculada con la justa calidad de parte, sea del sujeto activo o pasivo, en un proceso determinado, por lo que se enlaza con la relación que debe existir entre la persona que reclama o es reclamada, y la situación concreta que se alega como fundamento de dicha estimación; según el profesor Romero, se encadena con la titularidad de la situación controvertida en un juicio y es un presupuesto de fondo de procedencia de la acción, (así lo afirma en su Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 2014, p. 101). Por lo mismo, se trata de un requisito que normalmente debe ser discernido como cuestión sustantiva, en la decisión de mérito, en la cual el tribunal deberá establecer si la posición procesal reclamada por el demandante, o la atribuida a la demandada tiene asidero material; en la especie, se cuestiona la calidad de justa demandante de la señora Ana María Campillai, quien demanda indemnización por el daño moral que le provocó la agresión sufrida por su hermana Fabiola; al respecto, la doctrina reconoce que en situaciones de responsabilidad civil, surgen víctimas directas, que son aquellas que sufren directa e inmediatamente un daño consecuencial a un hecho ilícito; y, por otro lado, víctimas indirectas o por repercusión o rebote, que son quienes reciben un detrimento no directo en sus bienes o persona, sino que las consecuencias del perjuicio a una víctima inicial, por concurrencia de un hecho ilícito, existiendo autores que plantean un criterio restrictivo a quienes pueden demandar por esta última responsabilidad (en otras palabras, quienes ostentan legitimación activa),



desde doctrinas que proponen criterios alimentarios, sucesorios, o de exclusión a favor de la víctima más próxima; y otros que proponen un criterio amplio, esto es, la improcedencia de limitar *a priori* el derecho a demandar dicho tipo de daño.

A juicio de esta Corte, nuestra legislación, al no distinguir la calidad de víctima directa o indirecta en la responsabilidad extracontractual, impide aplicar obstáculos a la legitimación de quien reclama un daño por repercusión, pues a norma matriz en este asunto, otorga acción de indemnización de perjuicios de modo amplio y general, en efecto, el artículo 2329 del Código Civil, establece que *“Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.”*, de manera que el éxito de dicha acción dependerá, en concreto, de la suficiencia probatoria que permita demostrar la existencia de causalidad entre la conducta ilícita, y el perjuicio concreto que se reclama, siendo indiferente, en principio, el vínculo que ostente la víctima por repercusión de la inicial, sin perjuicio de que ciertos grados de parentesco o cercanía puedan considerarse para efectos del *quantum* de la indemnización. De esta manera, la excepción de falta de legitimación e improcedencia de la acción indemnizatoria respecto doña Ana María Campillai, debe ser desestimada, máxime, si, además, la sentenciadora *a quo*, determinó la responsabilidad de la parte demandada, al haberse acreditado, no sólo daño por rebote, sino también, uno de carácter directo. Todo ello, sin perjuicio de la petición subsidiaria de rebaja del monto indemnizatorio, formulada.

**Quinto:** Que, como segundo capítulo del recurso, el Fisco cuestiona los montos indemnizatorios otorgados, los que considera excesivos, pues el fallo estableció una condena que avaluó el daño moral de todos los actores, en un total de \$680.000.000.- que excede los términos de referencia de otros montos otorgados por los tribunales ordinarios de justicia, añadiendo que, si bien la regulación del daño moral es un aspecto que ha sido entregado a la regulación prudencial de los jueces de instancia, ello no puede confundirse con arbitrariedad o mero capricho, razón por la cual se han creado baremos y otros instrumentos que buscan otorgar algún tipo de guía objetiva para la determinación de tales guarismos. Añade, además, que el daño moral, en cuanto afectación a bienes inmateriales, no puede determinarse considerando la gravedad del hecho lesivo, ni tampoco con una finalidad sancionatoria o de penalización, sino teniendo en consideración la naturaleza satisfactiva de dicho resarcimiento.

Para sustentar sus argumentos, entrega datos relativos al baremo jurisprudencial, respecto parientes como los demandantes y se refiere a indemnizaciones por delitos de lesa humanidad, indicando que, tanto en las



situaciones recogidas por el primer instrumento, como en el segundo caso, los montos fijados en esta causa superan aquellos establecidos en aquellos casos, exceso que también se replica a propósito de la tabla indemnizatoria aplicable en materia de indemnización en procedimiento de mediación de salud, añadiendo otros casos jurisprudenciales de casos de daños similares, que establecen *quantum* menores.

**Sexto:** Que, al respecto, se hace necesario señalar que el fallo en alzada acogió la demanda respecto todos los actores, por concepto de indemnización por daño moral, condenando al Fisco de Chile al pago de:

Respecto Fabiola Andrea Campillai Rojas, la suma de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos); a favor de Marco Antonio Cornejo González, marido de la mencionada, la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos); a su hermana, doña Ana María Campillai Rojas, la suma de \$100.000.000 (cien millones de pesos); a su madre, doña María Isabel Rojas García, la suma de \$80.000.000 (ochenta millones de pesos); y a sus hijas Paloma Elisa y Frances Scarlett, ambas Castillo Campillai, la suma de \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos) para cada una.

El fundamento de tal decisión radicó en la comprobación del daño moral sufrido, cuya procedencia, como se indicó, respecto todos los actores, no se encuentra discutido (salvo lo relativo a la demandante doña Ana María Campillai, cuya apelación principal fue desestimada como se indicó previamente), por lo que la competencia de este tribunal se extiende solamente a la valoración de dicho perjuicio, habiéndose solicitado su rebaja prudencial.

**Séptimo:** Que, al respecto, es efectivo que la valoración de daño moral, debido a su naturaleza extra patrimonial, corresponde a una actividad que el juez debe efectuar de manera prudencial, esto es, regulando el monto indemnizatorio con cordura y ponderación, lo que debe excluir, no solamente la arbitrariedad y capricho, sino también debe procurar la utilización de criterios que de manera más o menos concreta, permita la determinación de un monto que no solamente logre compensar, de alguna manera, la afectación extra patrimonial que se haya establecido, sino que también, cautele el principio de igualdad consagrado por nuestra Constitución, en el sentido de respetar los criterios pasados de determinación del monto dinerario aludido, a fin de no incurrir en actos que provoquen diferencias impropias entre las distintas personas que postulan ante tribunales la tutela efectiva en situaciones similares, pues de otro modo, podría incurrirse en un tipo de discriminación indeseada por parte de los órganos jurisdiccionales.



Por lo mismo, se hace valioso y necesario considerar en dicha labor, todo instrumento nacional o comparado que permita realizar una regulación adecuada, en términos de la mayor racionalidad y objetividad posible, no obstante que tratarse del ejercicio de una apreciación que, como se dijo, en cierto modo, es prudencial.

Al respecto, es necesario reconocer el esfuerzo realizado por nuestra Corte Suprema destinado a proveer de herramientas que permitan, por lo menos, contar con un criterio que fundado en la jurisprudencia, permita acotar las bandas de valores que en nuestro país, acotable a ciertos factores objetivos, han sido otorgados por los tribunales de justicia, que es lo que se ha intentado realizar con los baremos desplegados en la página del poder judicial (disponible en <https://baremo.pjud.cl/BAREMOWEB>), que da cuenta del trabajo de la Universidad de Concepción, reuniendo datos jurisprudenciales e indicando los valores establecidos conforme ciertos criterios objetivos.

**Octavo:** Que, revisados tales antecedentes, resultan acertadas las observaciones realizadas por el Consejo de Defensa del Estado, relativas a la banda de valores que arroja el baremo jurisprudencial, el cual, indica que, en sentencias dictadas por la Corte Suprema, la indemnización por daño moral que se ha otorgado a personas que han sufrido la muerte de un hermano, no supera las 856 Unidades de Fomento; en el caso de daño moral por la muerte de un hijo, la mayoría de los fallos dictados por dicho máximo tribunal, no excede las 1347 Unidades de Fomento; respecto los hijos, por el fallecimiento de su progenitor, no supera las 880 Unidades de Fomento; y, finalmente, en relación al marido de la víctima, en la mayoría de los casos, no se superan las 1.130 Unidades de Fomento.

Respecto víctimas directas por daños en materia de accidente laboral, que afecta la cabeza y el rostro y otras partes de la anatomía, existen quince sentencias de la Corte Suprema, para el rango etario de la demandante, de las cuales, en el rango correspondiente al 70% de la media, la banda se mueve entre 443 y 4576 Unidades de Fomento, pero se debe señalar que existe una sentencia que estableció el daño moral en 13.791,84 Unidades de Fomento y luego una segunda que lo fijó en 6.549 Unidades de Fomento.

Por su parte, las sumas fijadas en la sentencia apelada, convertidas a Unidades de Fomento a la época de su dictación, corresponden a 8.329,75 Unidades de Fomento para doña Fabiola Campillai, 2.776,58 U.F. para su marido y hermana, 2.221,26 para su madre, y 1.388,29 para cada hija.



De este modo, considerado solamente la banda media del baremo en cada caso, es evidente que las indemnizaciones fijadas en el fallo recurrido exceden los márgenes jurisprudenciales de determinación del precio del daño moral.

**Noveno:** Que, a una conclusión similar se arriba a propósito del comportamiento de los tribunales nacionales en causas de derechos humanos, en las cuales se ha condenado civilmente al Fisco de Chile, por delitos de lesa humanidad cometido por sus agentes, esta Corte, en diferentes oportunidades, ha establecido valores que promedian aproximadamente \$80.000.000 para los padres y cónyuges, entre \$70.000.000 a \$50.000.000 para los hijos y \$40.000.000 o menos para hermanos. Sólo a vía ejemplar, se pueden mencionar los ingresos de esta Corte N.º 3.563-20, 3.622-20, 3.670-20, 2.233-21, 1.968-22, 2.641-22, 304-23 y 440-23; y, en la Corte de Apelaciones de Santiago, los roles 4.649-20, 1.271-20 y 4.255-20. La sentencia en alzada, tampoco se ajusta a tales criterios.

**Décimo:** Que, por su parte, es prudente tener en consideración también, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en caso de adopción de medidas de compensación a los que ha condenado a los Estados miembros, mediante indemnizaciones por el daño inmaterial provocado por violaciones a los derechos humanos, ha fijado montos, por los efectos síquicos que afectan a víctimas directas de tales ilícitos y sus familiares que no exceden de 60.000 dólares americanos para los primeros y de 40.000 dólares a la madre de la víctima directa y 20.000 dólares para sus hermanos (caso Cantoral Benavides contra Perú, de 3 de diciembre de 2001); en los antecedentes de la misma Corte, denominados Caso Maritza Urrutia vs Guatemala, por sentencia dictada el 27 de noviembre de 2003, se condenó al pago por concepto de daño inmaterial por la suma de 20.000 dólares americanos para la víctima directa, y 10.000, 6.000 y 1.000 dólares para hijos, padres y hermanos respectivamente. Otro ejemplo lo configura el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile, que con fecha 29 de mayo de 2014, consideró una indemnización por daños materiales por 50.000 dólares para las víctimas. Se debe tener presente que se citan estos casos sólo como referencia a los montos que se han fijado en este ámbito internacional.

Por su parte, en el caso de específico de reparaciones ordenadas por el mismo tribunal internacional por uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, se ha señalado (conforme lo explica y recopila en la obra “Uso de la fuerza por parte de Agentes del Estado. Análisis desde el derecho internacional de los Derechos Humanos, de María Franco Martín del Campo, Colección Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: miradas complementarias desde la academia, N.º 4, UNAM, México, 2017), que la fijación de la indemnización por



daño material debe considerar “...*el uso de la fuerza excesiva, desproporcionada o ilegítima que sufrieron las víctimas*”, y que en el caso más recientes que examina, que corresponde a aquel denominado Quispialaya Vilcapoma vs. Perú, cuya sentencia fue dictada el 23 de noviembre de 2015, en que la víctima resultó con incapacidad visual mientras prestaba el servicio material, se condenó al Estado del Perú al pago de una indemnización por daño inmaterial de 50 mil dólares para la víctima directa, y 20 mil dólares para su madre.

**Undécimo:** Que, a juicio de esta Corte, dados los hechos establecidos, acreditado el daño moral sufrido por cada uno de los demandantes, corresponde ajustar los valores establecidos por la sentenciadora *a quo*, considerando los parámetros del baremo del poder judicial ya referidos, como asimismo los demás antecedentes que fueron expuestos precedentemente, teniendo en cuenta, además, la naturaleza del daño sufrido por la víctima directa y sus parientes que actúan en el proceso, correspondiente, en el caso de la primera, al dolor físico y espiritual que le provocaron las graves lesiones sufridas, como asimismo sus consecuencias irreparables e irreversibles, como las circunstancias en que se produjeron, respecto su hermana, también es menester considerar la conmoción que el provocó ser espectadora de los hechos, y la angustia y dolor que la imposibilidad de obtener asistencia médica oportuna le ocasionó, como asimismo, el sufrimiento espiritual que ocasionó al marido, madre e hijas, quienes, además, han debido sobrellevar el dolor diariamente en su convivencia con doña Fabiola Campillai Rojas. Por lo demás, tales circunstancias y valoraciones ya fueron establecidos por la jueza de primer grado, y se encuentran suficientemente respaldadas y acreditadas con el mérito de los informes y certificados aparejados a los antecedentes, entre los cuales destaca el Informe del Servicio Médico Legal N.º 384-2020 aparejado legalmente a los antecedentes, que dan cuenta, respecto de la mencionada, de un juicio de realidad conservado, sin alteraciones senso perceptivas, y lenguaje conservado y coherente con capacidad de comprensión y abstracción conservada, al igual que sus funciones cognitivas como la memoria, aunque presenta amnesia de los hechos materia de autos, impresionando con un ánimo depresivo, presentando angustia, ansiedad, síntomas físicos, reacciones fóbicas, miedo, inseguridad, etc, con una modificación de su personalidad a raíz de la experiencia traumática, que se diagnostica como estrés postraumático que de no ser intervenido, puede generar una transformación permanente de su manera de ser, requiriendo tratamiento multidisciplinario de manera permanente; por su parte el informe del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) de 25 de noviembre de 2020, da cuenta de las profundas huellas sicosociales que el ilícito



dañoso le provocó, que conforme el certificado de discapacidad agregado a los autos, corresponde a una de naturaleza severa del 70%, cuya causa principal es la discapacidad sensorial visual, con movilidad reducida, lo que da cuenta de un daño inmaterial evidente, que se ve ratificado por la prueba testimonial rendida en autos.

Sin embargo, es insoslayable para esta Corte, considerar, además, a la hora de establecer prudencialmente el valor por el cual la demandante en referencia debe ser indemnizada, un factor que fluye de manera evidente de los antecedentes de la causa: en efecto, si bien es indiscutible la afectación extra patrimonial que sufrió la actora en los términos señalados, al mismo tiempo, de su historia vital reciente, que corresponde a un hecho público y notorio, es posible percibir, que a pesar de las aciagas consecuencias sufridas por el ilícito del cual fue víctima, ha sido capaz de sobrellevar el dolor físico y extra patrimonial que padece, e involucrar a su familia, conforme fluye del mérito de la prueba rendida, en un proyecto vital, que la ha transformado en un referente político contingente de la más alta relevancia, alcanzando la más alta investidura que un ciudadano chileno puede alcanzar en el ámbito de la representación del órgano legislativo nacional, al ser electa Senadora de la República de Chile, por la Región Metropolitana de Santiago, en lo que se demuestra un notable triunfo de su espíritu de superación y resiliencia personal, que corresponde a una dimensión que debe ser abordada a la hora de ponderar el alcance de la indemnización que por el rubro solicitado, debe ser fijada.

En el mismo sentido, y por las mismas razones, se hace necesario ajustar los montos establecidos a favor de los demás actores, conforme los criterios ya enunciados precedentemente y que prudencialmente se fijan en las cifras que se expresarán en la parte dispositiva del presente fallo, por considerarse más ajustado a la equidad y prudencia a la luz de los antecedentes referidos anteriormente, y considerando lo obrado con anterioridad por los tribunales superiores de justicia, que como se indicó, proveen de un baremo o banda valores indemnizatorios a los que debe ajustarse los montos, como expresión, además de la prudencia, de la certeza e igualdad jurídica.

**Duodécimo:** Que, en lo relativo al último extremo de la apelación, se pretende por el recurrente la enmienda de la decisión que dispuso que sobre las sumas condenadas a pagar deben considerarse intereses desde que el fallo quede firme, señalando la improcedencia de dicho capítulo en la presente materia, y solicitando que dichos intereses se calculen sólo desde que la demandada se constituya en mora.





Sin embargo, a juicio de esta Corte, como la mora, se regula en el artículo 1551 del Código Civil, no es procedente su aplicación en sede de responsabilidad extracontractual, sea para el devengo de intereses resarcitorios o moratorios, por cuanto es palmario que las hipótesis que dicho precepto, en especial en sus acápites 1° y 2°, corresponden a situaciones impropias e inaplicables en esta materia, que no es posible extender a la responsabilidad extracontractual, razón por la cual es correcto disponer que los intereses se devenguen desde que la sentencia queda firme, como dispuso el fallo en alzada.

Y atendido lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes, y artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, se declara que:

I. Se **confirma**, la sentencia de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la ministra de fuero doña Celia Catalán Romero, **con declaración** que se rebaja el monto de la indemnización de perjuicios por daño moral otorgada a los demandantes a las siguientes sumas:

- a. A doña Fabiola Andrea Campillai Rojas, \$ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos);
- b. A don Marco Antonio Cornejo González, \$60.000.000 (sesenta millones de pesos);
- c. A doña Ana María Campillai Rojas, \$60.000.000 (sesenta millones de pesos);
- d. A doña María Isabel Rojas García, \$60.000.000 (sesenta millones de pesos);
- e. A doña Paloma Elisa Andrea Castillo Campillai, \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).
- f. A doña Frances Scarlett Castillo Campillai, \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos).

II. Se **confirma** la sentencia en lo demás apelado y se mantiene igual en lo demás dispuesto.

Se previene que la Ministra Liliana Mera Muñoz concurre a la decisión de confirmar el fallo en alzada en lo que dice relación con la procedencia de la indemnización del daño moral demanda por Ana María Campillai teniendo para ello únicamente presente que dicha decisión no causa agravio a la parte apelante, toda vez que sólo fundó su recurso en la improcedencia de acoger la pretensión de la actora respecto del daño por repercusión, en circunstancias que ésta



demandó además por el daño directo que el ilícito le causó, estableciendo la sentenciadora del tribunal *a quo* la responsabilidad de la demandada también por haberse acreditado este último. Así entonces, aún de estimarse que no corresponde que se la indemnice por el daño por repercusión, de todas formas corresponde indemnizarla por el daño directo sufrido, sin que en esta parte la demandada impugnara la decisión del tribunal de primera instancia.

Redactada por el ministro Martínez.

Regístrese y devuélvase.

**N° 1.245-2023-Civil (Fuero).**

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por los ministros Ma. Carolina Catepillán Lobos, señora Liliana Mera Muñoz y señor Patricio Martínez Benavides.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RXWFXMXXLXW

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Maria Carolina U. Catepillan L., Liliana Mera M., Patricio Esteban Martinez B. San Miguel, diez de abril de dos mil veinticuatro.

En San Miguel, a diez de abril de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

